



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 23 - (3ra. época)

15-06-2020

EDICIÓN ESPECIAL

HAY QUE EXPROPIAR VICENTIN SIN PAGO Y NACIONALIZAR EL COMERCIO EXTERIOR

Presentamos este número especial de *no transar*, editado en el contexto de crisis sanitaria por el coronavirus. Lo hacemos para que el aislamiento físico que impone la pandemia no redunde en un aislamiento político: en las difíciles condiciones actuales, *no transar* sigue siendo una herramienta para la organización colectiva. Ofrecemos esta entrega para leer y difundir entre nuestra militancia, simpatizantes y compañeros de lucha, en la vocación de que la salida de esta crisis ponga por delante los intereses de los trabajadores y el pueblo.

La cuarentena no impide la lucha

Pág. 12

Importante jornada nacional

Pág.16

Covid-19 + Liberalismo: ¿Cómo intervenir?

Pág.19

El imperialismo se pudre por la cabeza

Pág.24

Editorial

Vicentin, una historia de acumulación fraudulenta

Apremiado por la crisis y, cuando escalan los efectos de la pandemia, el gobierno decretó la intervención del grupo Vicentin S.A. y anunció el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Los apuros, más allá del “stress financiero” anunciado por el grupo para justificar la cesación de pago en diciembre 2019, se enmarcan también en el improvisado rumbo del plan económico post-pandemia. Por otro lado, un componente central en dicho plan refiere también al acuerdo, cada vez más indulgente con los bonistas, para cerrar el pago de la deuda externa sin caer en default.

Lo cierto es que el aparente apuro en la decisión tomada contrasta con las negociaciones abiertas desde inicios de año. También con las advertencias y presentaciones realizadas por Claudio Lozano como directivo del Banco Nación, en relación a los pasivos y enjuagues aún después de la convocatoria de acreedores, realizados por la empresa. El asombro planteado por algunos medios tiene más que ver con el aparente antagonismo de la medida al “statu quo” existente en los círculos del empresariado local, acostumbrado a que el es-

tado se haga cargo de los retazos de las empresas quebradas, pero no de aquellas que gozan de salud y de última, son apetecidas, como en este caso, por otras multinacionales u operadores de fondos de inversión. Un “ataque a la propiedad privada” como denunció el Pro, no hubiera entrado en cuestión, siempre que la titularidad del grupo lo asumieran otros interesados como Dreyfus o Cargill. No está definido aún en el ámbito oficial cuál será el alcance -si se concreta- de la expropiación, aunque sí está claro que la oportunidad fue considerada exhaustivamente, y que por otro lado no desenchaja con medidas similares visto la crisis en el capitalismo occidental como también los efectos más gravosos introducidos por la pandemia. Ni las presiones del imperialismo fueron tantas ni el rechazo de los grupos locales muy profundos. Tal es el caso de la tibia declaración efectuada por la UIA. Por otro lado desde el gobierno, por si no quedaba claro, lo plantearon como una excepción y se encargaron muchas veces de ratificar su pertenencia, curados en salud, al mundo de un capitalismo pretendidamente menos hereje.

Vicentín S.A. es un grupo agroindustrial local radicado al norte de la provincia de Santa Fe. Con un crecimiento acelerado y diversificado en los últimos 20 años, controla 17 empresas, entre frigorífico, algodónera, aceitera, vitivinícola, envase, etc. En 2013 inauguró la planta de biocombustible y derivados de soja más grande del mundo, en sociedad con la multinacional Glencore. Cubre el 10% en el mercado de exportación de granos y su

nivel de facturación alcanza los U\$S 4.000 millones. Su capacidad financiera tocó fondo en 2019, con una deuda contable de U\$S 1.350. Entre sus acreedores, la banca local suma el 22%, dentro de lo cual el Banco Nación figura con U\$S 350 millones, y la banca internacional suma el 30% siendo la CFI del Banco Mundial la principal acreedora. Por otro lado, en la deuda comercial, son más de 2500 los productores de la zona afectados por sus cosechas impagas. El argumento esgrimido por el CEO Nardelli sobre los perjuicios de las devaluaciones en 2018/19 es insostenible desde el momento que por su actividad exportadora el 85% lo cobran en dólares. La displicencia para renovar u otorgar los créditos por parte de González Fraga como presidente del Banco Nación en el gobierno anterior, y por fuera de lo estatutario, tiene más que ver con negociados en beneficio mutuo que con la insolvencia declarada. Vicentin tiene empresas en Paraguay, Uruguay, Panamá y en Europa. La triangulación, subfacturación y lavado han sido una práctica constante, y común también por parte de las otras cerealeras que manejan el comercio exterior y tienen sus casas matrices en el extranjero. En este caso gran parte de las divisas quedan afuera; declaradas o no, forman parte en la constitución de activos en el exterior. Por lo cual todos sus accionistas, más allá del destino del grupo en el orden local, nunca dejarán de ser millonarios. La firma Renova, radicada en Timbués (San Lorenzo), es la empresa compartida con la suiza Glencore y figura como empresa extranjera desde la confor-

mación de Vicentin Paraguay S. A. Con la venta de una parte de las acciones en 2019 (Vicentín se quedó con el 27%) aún se desconoce su aplicación, puesto que nunca cancelaron deuda con el Nación.

Existen sobradas razones para que sea considerada de utilidad pública, más aun cuando están en juego los puestos de 7.000 trabajadores, a los que se agregan las acreencias impagas de cientos de productores y de cooperativas de la zona.

De qué soberanía alimentaria hablan

De allí al intento de justificar la intervención para garantizar la “soberanía alimentaria” como dice el gobierno, hay un largo trecho. Por elevada que sea la producción de alimentos, no habrá soberanía alguna si a la vez el 50% de la población es pobre y está muy lejos de acceder a una canasta completa tasada hoy en \$ 65.000. Por otro lado, hablar de soberanía remite a quien tiene el poder, visto que han pasado muchos gobiernos, y sin embargo el país no garantiza soberanía sobre sus recursos económicos, financieros, energéticos y marítimos, ni la justicia social, ni la jurídica, por mayor cantidad de votos que logre sumar.

Tampoco es serio el argumento de “empresa testigo”, en un rubro que por cierto controlan los pool de siembra asociados a las cerealeras y monopolios de insumos, máquinas y derivados. Por lo cual, si se concreta la expropiación, el estado solo representaría menos del 10% en el comercio de granos.

En un comparativo con el rol de YPF en el rubro hidrocarburífero, en cuya composición accionaria con mayoría del estado, también integran bonistas como Blackrock, las condiciones siempre las terminan imponiendo las petroleras. Tan es así, que los precios del combustible local nunca bajaron cuando internacionalmente el barril del crudo llegó a cotizar a valor negativo o cero. Tanto la “empresa testigo” como la “soberanía alimentaria” son medidas parciales camufladas bajo un falso estatismo, cuando aún está pendiente quién se hará cargo del pasivo que arrastra la empresa como de los puestos de trabajo en juego. También se desconoce si la expropiación abarcará a todas las empresas del grupo, incluida la porción societaria dentro de Renova, dirigida por Glencore.

En un gobierno que se pretende iría a fondo con medidas que signifiquen cambios estructurales, tal como reclaman algunos integrantes del Frente de Todos, correspondería avanzar en la estatización de todo el comercio exterior como también disponer, a partir de la banca oficial, del control, orientación y nacionalización de los depósitos y acreencias bancarias. En el caso puntual de Vicentin, hay suficientes elementos para disponer la confiscación del grupo sin pago indemnizatorio alguno. Pero las disparidades dentro del oficialismo, que pretende montar una gesta pero se enreda permanentemente sobre la profundidad de la medida, no son tales al momento de cerrar acuerdos para el pago de la deuda externa en condiciones cada vez más favorables a la propuesta de los bonistas. Ambas

cosas, la posible expropiación como el pago de la deuda, son parte de la misma política. No solo por las divisas que genera la facturación del grupo que hacen tanta falta, también por el bono de compensación atado a la exportación, con lo cual el ministro Guzmán pretende endulzar a los usureros.

Los trabajadores presentes, los jerarcas ausentes

La prórroga de la cuarentena en función de amortiguar víctimas y contagios del Covid-19, no logra disimular que la preocupación central para gran parte del país radica hoy en la precariedad de vida, la desocupación y la pobreza. La respuesta a la emergencia alimentaria y ocupacional es tardía e insuficiente en todos los planos. En abril se perdieron 91.000 puestos del trabajo registrado, y en su proyección anual no bajan de 600.000. A la de por sí dura situación social se agrega el deterioro salarial, nuevos despidos y suspensiones, costo de vida, déficit habitacional, niñez abandonada, y otras tantas realidades como femicidios, violaciones, discriminación y represión a los jóvenes principalmente.

En esa perspectiva, el anuncio efectuado oportunamente sobre un plan de obras públicas para recuperar 750.000 puestos laborales en todo el país aún no empezó y tampoco resulta suficiente frente a tantas necesidades. Los trabajadores de la salud, a la vanguardia de la lucha contra el virus, no son atendidos en sus reclamos laborales y sa-

lariales. El 10% han sido contagiados y en muchos casos seguidos de muerte. Por eso se movilizan en distintas provincias y hospitales, de la misma forma que en Córdoba otros sectores públicos afectados por recortes, y otros tantos por despidos en el Conurbano.

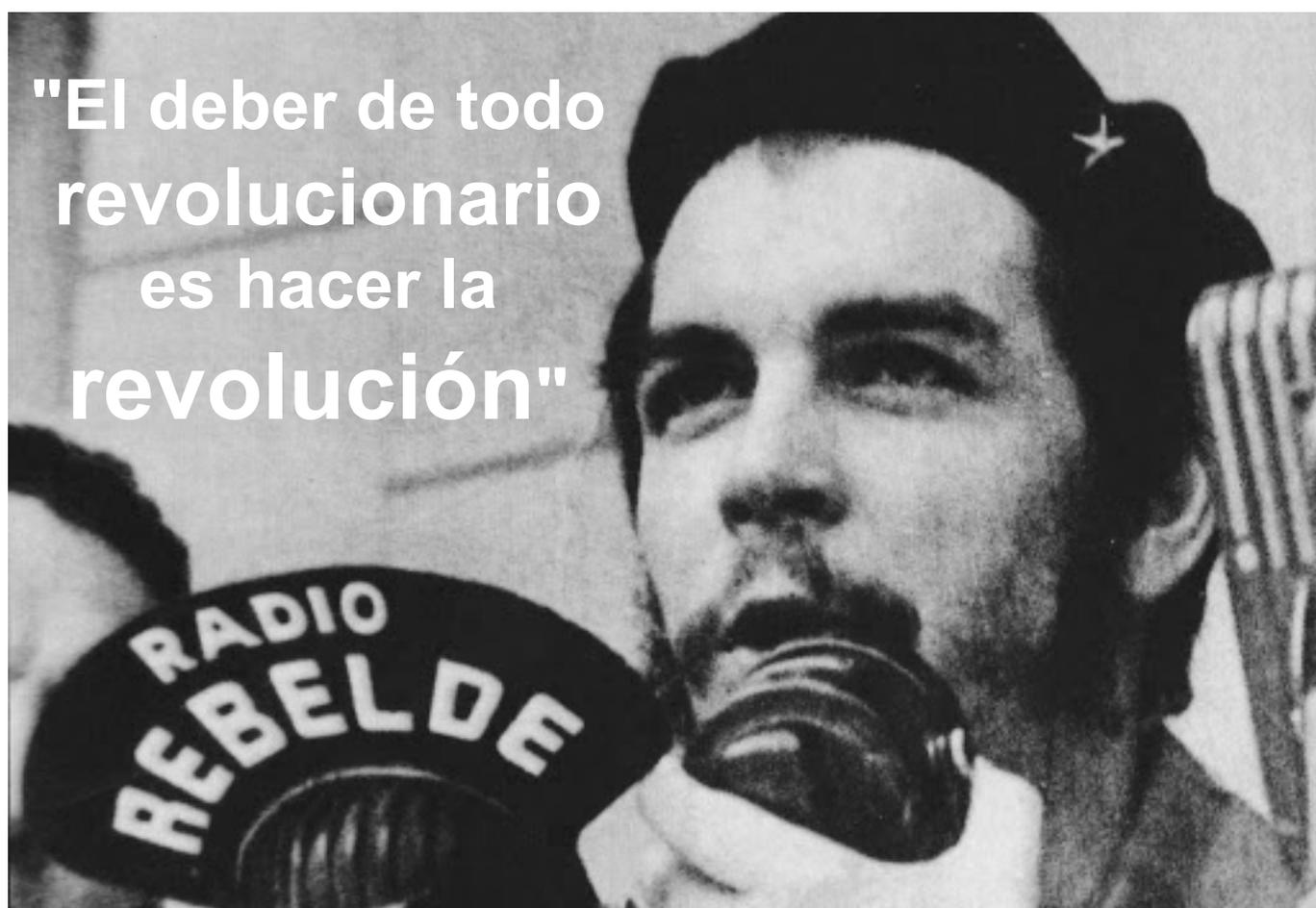
La conducta de la CGT atada en el acuerdo con la UIA y el gobierno, de por sí ya es repudiable. Pero asombra mucho más la ausencia y el boicot de las direcciones de las CTA y otros gremios estatales, cuya pérdida de iniciativas solo se explica en la obsecuencia ante un gobierno, distinto al macrismo por supuesto, pero que tampoco expresa los intereses o programa de los trabajadores, ni respeta los niveles salariales, ni las paritarias, ni genera trabajo genuino, ni combate al monopolio. De la misma forma el espacio de las organizaciones sociales apodadas Cayetanos, cuya gran parte de la dirigencia se han mimetizado como nuevos funcionarios en los ministerios. En la otra dirección están las distintas expresiones del piqueterismo combativo, que tomando los recaudos sanitarios del caso, confluyen en el reclamo y la militancia concreta para paliar el hambre de tantos compañeros.

No se trata de ser impacientes ante un gobierno que recién comienza ni ser indiferentes ante el azote de la pandemia. Pero hay una historia conocida, también un camino para obtener los recursos y cumplir con las prioridades del pueblo y de la nación. Eso es justamente lo que no aparece en estos largos meses, con un gobierno pendiente de

lograr acuerdos con los bonistas y el FMI, como de plantear la intervención a una cerealera por única vez, en lugar de estatizar todo el comercio exterior. La resignación a vivir en la pobreza y a su vez organizarla para contenerla, va contra la propia historia de la clase trabajadora. Es una política de conciliación condenada a la derrota, más aún si se pone paños fríos a la movilización de masas y se reemplaza la acción de calles por la disputa institucional.

Andrés Zamponi

1928 ★ 14 de junio ★ 2020



Historia y números de un monopolio

Los comienzos del grupo Vicentin fueron a fines de la década del '20 con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Años más tarde, la empresa inició su actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmontadora de algodón y fábrica de aceite resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní.

En 1966 se incorporó en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes que condujo a que los niveles de producción se incrementaran considerablemente y que la compañía se insertara definitivamente en el sector agroindustrial argentino.

A fines de 1979 se puso en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, Santa Fe. Luego comenzó a exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná. En 1997 comenzó a funcionar una tercera planta de molienda de soja en el mismo complejo portuario.

También está expandida a los rubros textil y frigorífico, en el cual produce para el mercado interno y para la exportación. Hacia 2005 inició sus actividades Vicentín Paraguay S.A. como agente de comercialización de soja. A mediados de 2007

se metió en el sector de biocombustibles, siendo la primera empresa del país en exportar biodiesel desde su planta en Avellaneda.

La firma tiene participación con carácter de accionista en estas empresas: Vicentin Paraguay S.A.I.C. (97%), Vicentin Europa S.A. (100%), Oleaginosa San Lorenzo (99%), Diferol (95%), Tastil (100%), Río del Norte S.A. (50%), Vicentin Brasil (100%), Biogas Avellaneda (50%) y Renopack S.A. (50%). Y participación minoritaria en Renova (33,3%), Emulgrain (25%), Playa Puerto S.A. (10,2%), Enav S.A. (5%), Sir Cotton (3%), Juiar (3%), Buyanor (0,6%), Algodonera Avellaneda (3%), Friar S.A. (0,4%), Terminal Puerto Rosario (10,2%) y Sottano S.A. (5%).

Otros datos:

- **En el rubro oleaginosas, su producción diaria es de 29.500 toneladas y tiene ventas por 3000 millones de dólares. Más del 85% de esas ventas representan exportaciones, según el último ejercicio.**
- **Es la mayor productora de biodiesel del país.**
- **Posee dos terminales portuarias.**
- **En el año 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, y en el 2018 el 27%.**
- **Le debe 9.500 millones de pesos al Estado Nacional en concepto de impuestos.**

La cuarentena no impide la lucha

Paso a paso, superando los límites y ataduras que impone la cuarentena, los reclamos de los trabajadores van ganando las calles. Tras una prolongada recesión económica, en parte heredada del macrismo y potenciada por los efectos del parate obligado ante el Covid-19, millones de argentinos ven deteriorarse gravemente sus condiciones de vida.

Indudablemente, la declarada emergencia sanitaria absorbe el centro de las preocupaciones y ata la movilización de los trabajadores. Sin embargo, las amenazas de despidos masivos, las suspensiones y las reducciones salariales, junto a una inflación persistente, con su secuela de empobrecimiento de la mayoría de los hogares populares, al mismo tiempo, constituyen un combo que está en la base de los reclamos crecientes.

Así lo ponen de manifiesto las luchas de profesionales y trabajadores de la salud del AMBA, donde suman a las condiciones laborales extremas en relación a la pandemia, las demandas económicas y promesas incumplidas; los docentes y estatales chubutenses van por el pago de los sueldos adeudados; y los trabajadores del Frigorífico Penta marcharon con la reincorporación de los despedidos al frente.

Por su función, los trabajadores llamados 'esenciales' están más expuestos a los contagios del virus, soportan condiciones de protección precarias y eso cuando existen. Un caso criminal es la muerte por contagio de María Ester Ledesma, trabajadora del Hospital Interzonal Gandulfo, en Lomas de Zamora. La compañera pertenecía a un grupo de riesgo y varias veces encontró la negativa de la dirección del hospital a sus pedidos de licencia. Un asesinato sin más.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, con el acompañamiento de los sindicatos o sin él, se afirma poco a poco la tendencia a la organización y al reclamo callejero.

El gobierno nacional por su parte camina a veces por el carril 'izquierdo' cuando aplica un plan de contención social a través del IFE (Ingreso familiar de emergencia) y el aumento de la AUH y la tarjeta alimentaria e, inclusive, el programa de pago parcial de los salarios, aunque a todas luces insuficientes ante la magnitud del daño social producido. Otras veces ejerce el músculo 'derecho'. Tolerante con la desobediencia de las grandes patronales a sus decretos que prohíben los despidos y suspensiones. Frente a Techint, los 1350 despidos de trabajadores fueron homologados por el propio ministerio de Trabajo. Confirmando esta conducta, en las resoluciones de este ministerio se activa el artículo 223bis de la ley de contrato de trabajo que habilita, en casos de 'fuerza mayor', las suspensiones.

Este camino además contó con el acompañamien-

to y complicidad de la dirigencia de la CGT que, previamente lo habían acordado con la cúpula de la Unión Industrial. No fue impedimento que el propio Centro de Estudios de la entidad empresaria anunciara que “en marzo el sector perdió 38.700 puestos, una caída de 3,4% respecto al mismo mes de 2019”.

Este acuerdo CGT-UIA se da en el contexto de una ofensiva de las grandes patronales de consolidar el ajuste de hecho al salario de los trabajadores y la brutal caída del poder de compra hasta aquí, y avanzar -con los despidos y suspensiones- sobre los derechos laborales vía la flexibilización.

En la misma dirección van los pedidos del gobierno nacional para sostener la parálisis de las discusiones paritarias, manteniendo en sus manos la ‘regulación’ de los salarios – en particular los estatales -como ya hiciera con las jubilaciones.

Mientras, el gremio de la Sanidad encabezado por Daer pactó un ajuste salarial del 7.8 por ciento por los meses de mayo, junio y julio; por el contrario, la Federación de Aceiteros logró un 30% para la rama desmotadores de algodón, vigente al 1º de abril, más un bono de \$12.000. Distinta conducta, distinto resultado.

Por su parte, la corriente sindical de Moyano se llama a silencio. Evita así ser parte de una cruzada ajena en un contexto de ajuste y depresión económica, mientras no deja de negociar los intereses de su gremio, que no siempre se transparentan a sus trabajadores.

En igual sentido se mueven ambas CTA que, con

sus iniciativas, persiguen la defensa de sus espacios políticos antes que llevar a las calles los reclamos legítimos.

En cambio, el Plenario Sindical Combativo, con los límites de su alcance y representatividad, promueve una jornada nacional de lucha -bajo modalidades diversas- que incluye una movilización a Plaza de Mayo.

En síntesis, como expresara la Corriente Sindical Jorge Weisz en su Encuentro de Chaco: “La clase obrera debe ir por su propio proyecto. Atravesamos una crisis estructural del capitalismo dependiente y para salir de ella hay que romper con las ataduras a los monopolios y banqueros. Ya sea en su expresión más cruda como el neoliberalismo o en el intento de un capitalismo ‘mejorado’ igualmente sujeto por las grandes corporaciones”.

Convocamos a discutir y organizar la unidad de los que luchan a agrupaciones, comisiones gremiales y sindicatos, delegados y militantes, para movilizarnos por el bienestar de las mayorías populares, en defensa de la salud, el trabajo, el salario y los programas sociales, no al pago de la fraudulenta deuda externa.

Ricardo Jufré

Desocupados

Importante jornada nacional

Debido al incumplimiento de los acuerdos con funcionarios de las diferentes aéreas del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, el jueves 11 CUBa-MTR en el Frente de Lucha Piquetero, volvió a movilizarse en una importante jornada nacional con cortes de rutas y calles entre otras acciones, en más de 17 provincias, ciudades y localidades de todo el país.

Desde el anuncio del gobierno sobre la prolongación de la cuarentena hasta el 28 de junio, vemos con mucha preocupación el incumplimiento acordado en la entrega de alimentos y elementos de limpieza. La falta de productos secos en los comedores, así como de leche, harina o azúcar en el caso de los merenderos de las organizaciones que funcionan en todo el país, agudizan cada vez más la desnutrición de nuestros niños, adultos mayores y compañeras embarazadas, que acuden diariamente a nuestros locales. La situación de los desocupados se agrava día a día frente a la imposibilidad de acceder a una changa. Los 8.500 \$ que reciben aquellos que tienen un plan son insuficientes y no se condicen en absoluto con el precio de la canasta familiar. El IFE fue muy promocionado

por el gobierno pero aún mas del 40% de los inscriptos no pudieron cobrar. A ello se suman la falta de agua en los barrios y los cortes de luz por más de 24 hs; son todos reclamos realizados en forma constante sin que exista una respuesta concreta. Con el avance del coronavirus, las infecciones y muertes aumentan entre la población más vulnerable. El gobierno lejos de atender los pedidos formulados desde los barrios humildes del país, está abocado al acuerdo con los tenedores de bonos de la fraudulenta deuda externa. Sea cual sea la forma de pago a la que llegue el ministro Guzmán, ese compromiso afectará las necesidades de los pobres, con un mayor crecimiento de la desocupación, el hambre y la miseria.

La jornada del pasado jueves 11 dejó blanco sobre negro que la situación es insostenible. Las nece-



sidades son hoy. No hay cuarentena posible con hambre. No podemos mantener distancia cuando la canilla que provee de agua a varias familias está en la punta de la villa y tenemos que hacer fila y luego acarrear baldes dos cuadras. Es imposible llamar al centro de salud “ante cualquier duda” por celular, si la luz se corta durante largas horas impidiendo cargar los equipos. No alcanza con “no salgas, quedate en casa” si no contamos con una olla que alimente a la familia.

La confluencia de organizaciones territoriales y piqueteras a lo largo del país, una vez más marca que el reclamo está en las calles, hoy teniendo en cuenta los cuidados correspondientes. La actividad nuevamente es un llamado de atención de los que menos tienen al gobierno y una exigencia con el cumplimiento de los acuerdos.

- ENTREGA DE ALIMENTOS EN FORMA INMEDIATA.
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
- AUMENTO DE PLANES SOCIALES Y AUH.
- APERTURA DE PROGRAMAS PARA TODOS LOS DESOCUPADOS.

Oscar Kuperman

¿Cómo intervenir ante el Covid-19 cuando impera el liberalismo?

Una mirada sobre los aportes epidemiológicos de Tomoya Saito, Director del Departamento de Gestión de Crisis de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de Japón

Entre tantas enseñanzas, el comportamiento social e individual frente a la pandemia por Covid-19 es uno de los capítulos más importantes. Los resultados en materia de control en aquellos países donde ha imperado el distanciamiento y la cuarentena y donde no, muestra una ventaja a favor de los primeros, quienes vienen ganando la pulseada en forma elocuente. Baste comparar los números de morbilidad, mortalidad y letalidad de China, Vietnam o Venezuela con los de Estados Unidos, Inglaterra o Brasil, y la discusión habrá acabado sin atenuantes. Sin embargo, no todo está dicho. El riesgo de nuevas oleadas de contagio y el surgimiento de grupos anti cuarentena pueden diluir las diferencias, especialmente en aquellos países con políticas sanitarias ambiguas, como Argentina, donde se advierten avances y retrocesos en las etapas de control de acuerdo a los intereses sociales en pugna.

Por dicho motivo resulta interesante saber cómo determinados países políticamente híbridos en

materia sanitaria -es decir, con fuertes presencias de la salud pública y del mercado de la salud- han logrado descubrir ciertas claves para interrumpir tanto el incremento de casos y muertes como para asegurar una respuesta inmediata.

Un caso paradigmático al respecto es Japón, país capitalista central que al día 6 de junio, reporta 903 muertes por Covid-19, significando la tasa de mortalidad más baja dentro del grupo que integran el G7 (0,72 por 100,000 personas).

El gobierno nipón carece de autoridad legal para implementar medidas restrictivas tales como cierres al desplazamiento y toques de queda, motivos por los cuales, por ejemplo, las restricciones a los viajes son solicitadas en forma voluntaria.

Culturalmente los japoneses respetan las normas sociales no codificadas. Las medidas de distanciamiento físico existen bajo la Ley de Medidas Especiales pero el gobierno sólo puede alentar a las personas a quedarse en casa. Se puede solicitar el cierre de las instalaciones, pero los infractores no serán castigados.

De esta forma, tras el desaguizado del crucero de lujo Diamond Princess, Japón avanzó hasta levantar el estado de emergencia sanitaria el 25/05/20, progreso que se hizo sin bloqueos ni toques de queda.

El primer paso para controlar la enfermedad emergente fue detectar el brote y responder tempranamente a través de investigaciones de campo para comprender la dinámica de la transmisión.

El sector salud del Japón cuenta con 469 centros

de atención pública y más de 25.000 trabajadores quienes, tempranamente, fueron volcados a rastrear contactos incluso antes de que el virus se generalizara en el país. Sin aplicaciones digitales de rastreo (dada la renuencia de los pacientes a revelar información personal), la búsqueda de contactos fue de tipo “analógica y lenta”, lo que implicó llamar a los pacientes y pedirles cortésmente que nombrasen a las personas con las que se habían reunido durante la última quincena. Esta estrategia permitió establecer un enfoque eficaz centrado en los denominados clusters o agrupamiento de personas.

Lo que redescubrieron los japoneses fue algo conocido desde hace tiempo: la denominada percolación o geometría del contagio, es decir, la existencia de grupos de personas, la tendencia a la propagación de una enfermedad transmisible dentro de un grupo y, eventualmente, el salto del contagio de un grupo a otro una vez completado el contagio de los integrantes del primero. Como el fuego que se propaga de un conjunto de árboles a otro durante un incendio en el bosque.

Un paso de avance en la búsqueda fue dejar de correr detrás de la enfermedad al advertir que encontrar casos a través de testeos a personas que habían tenido contacto con infectados, como es usual en Argentina, no era particularmente efectivo, ya que si bien muchos enfermos no contagiaban a nadie, unos pocos terminaban infectando a muchos, formando de esta manera grupos o clusters de infectados a partir de una sola fuente. Por eso,

además del seguimiento de los contactos, las autoridades sanitarias se centraron en el seguimiento retrospectivo de los vínculos entre los infectados encontrando, a partir de los mismos, casos inicialmente no detectados que rodeaban a esa fuente original de infección. De esta forma fueron identificando diferentes grupos de contagiados.

Como lógica consecuencia, el monitoreo de los grupos no vinculados entre sí condujo a la detección temprana del crecimiento exponencial en el número de infectados en cada grupo separado, lo que posibilitó al gobierno proporcionar una alerta temprana efectiva.

Seguidamente, a partir de la investigación cualitativa de los conglomerados, los japoneses reconocieron que las "tres C" (cerrados, colmados, cercanos) eran los principales factores de riesgo ambiental que caracterizaban a los mismos. Por dicho motivo, el gobierno introdujo a principios de marzo el eslogan "evite las tres C", lo que ayudó significativamente a retrasar el pico. La mayoría de las personas hicieron esfuerzos para quedarse en casa y los centros comerciales permanecieron cerrados en las principales ciudades durante el estado de emergencia. Esto se vio facilitado porque previamente saludos tales como darse la mano, abrazarse y besarse eran consideradas costumbres occidentales no bien vistas. Como contrapartida, muchos japoneses resultaron menos reacios a usar barbijos ya que es común emplearlos para protegerse contra la polución y las alergias al polen en primavera y a la gripe en invierno.

Sin embargo, hay que estar atentos. Anders Tegnell, epidemiólogo jefe de Suecia, quien diseñó el “enfoque suave al virus”, de corte liberal, comentó que: “si tuviéramos que encontrar la misma enfermedad con el mismo conocimiento que tenemos hoy, creo que nuestra respuesta aterrizaría en algún lado entre lo que hizo Suecia y lo que ha hecho el resto del mundo” (obviamente a riesgo de repetir errores al eludir la importancia de las costumbres sociales).

De una forma u otra, por tradición, adhesión voluntaria o imposición, el aislamiento sigue aportando evidencia a favor de distanciamiento social mientras dure la emergencia.

Eduardo Maturano, Médico Especialista en Epidemiología e Infectología

LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO

**DETENIDO POR LUCRAR
CONTRA LA REFORMA
PREVISIONAL MACRISTA**



El imperialismo se pudre por la cabeza

La proliferación de protestas callejeras que ha conmovido a los EEUU tuvo como detonante el asesinato policial de un joven afroamericano en Minneapolis, pero derivó en un estallido social en plena cuarentena, que delata una crisis social de enormes proporciones y acelera una crisis política que todavía no tiene techo. Las movilizaciones derivaron rápidamente en tomas y quemas de comisarías y patrulleros, saqueos de grandes locales comerciales y toda forma de expresión de una justa ira popular en un contexto en extremo opresivo.

Los intentos por contener esta rebelión con más represión fueron un baldazo de nafta en la hoguera. A pesar de la enorme capacidad represiva de las fuerzas de seguridad, la rebelión se expandió y amplió su base social. A las provocaciones públicas de Trump, amenazando con meter plomo a los manifestantes y declarando organización terrorista a los movimientos antifascistas, la población de Washington le respondió incendiando los alrededores de la Casa Blanca y forzando a la guardia presidencial a esconder a Trump en un bunker secreto por temor a ser desbordados por la movilización. La imagen -nunca divulgada- del gringo matón escondiéndose bajo tierra para refugiarse

de la furia de su pueblo, actualiza la idea del “tigre de papel” con que Mao graficaba al imperialismo. No es novedad que la población negra en EEUU es una de las más oprimidas históricamente. Hasta bien entrada la década del 60 del siglo XX los afroamericanos seguían sin tener acceso a los derechos civiles básicos. Tampoco es novedoso que, aún con igualdad formal ante la ley, las desigualdades reales son abrumadoras. Estadísticamente un afroamericano tiene 4 veces más posibilidades de ser muerto por gatillo fácil que un “blanco”. En los hechos, un “blanco” percibe un salario 26,5% más alto que un afroamericano, y un tercio de la población negra está por debajo de la línea de pobreza. La población latina vive una realidad similar. Si a esto le sumamos que fruto de la actual crisis se han perdido al menos 40 millones de puestos de trabajo en EEUU, la situación social entre la población negra, así como entre los latinos, es des-



esperante. En este marco y en plena pandemia, son estas “minorías sociales” las que, proporcionalmente, están cargando con la mayor cantidad de muertos debido a no contar con seguro médico. Sin embargo, el estallido social que se desencadenó frente a este asesinato no es lo habitual. Las razones están en el contexto social que rodea al crimen de Floyd. El colapso económico está dejando a decenas de millones de personas sin empleo, las desigualdades y los sufrimientos de las masas trabajadoras se potencian, y la crisis sienta las bases de una ruptura en la típica apatía frente a injusticias cotidianas. Esta ruptura se está dando por millones en todo el país.

La principal potencia imperialista a nivel mundial está sumida en una crisis que no registra precedentes. Una parálisis económica, pese a la débil cuarentena aplicada, que está dejando una desocupación récord en su historia. Niveles de pobreza y miseria que vuelven comunes las imágenes de millones de personas alimentándose por la asistencia social de emergencia. Un colapso del sistema sanitario que se refleja en más de 100.000 muertos a la fecha.

Una de las primeras consecuencias del estallido son las grietas políticas dentro de las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia en torno a la represión de la protesta social ordenada por Trump. Mientras el presidente reclamaba a los gobernadores que “aplastaran” las movilizaciones, amenazando con sacar las fuerzas armadas a la calle, el secretario de Defensa Mark Esper afirmó que el

Pentágono no está dispuesto a invocar la “Ley de insurrección” que faculta al presidente para hacer uso de la fuerza militar para “intervenir en desórdenes civiles”. Inmediatamente, el secretario obtuvo el respaldo de la plana mayor militar. Acto seguido, su antecesor en el cargo durante la misma gestión de Trump, John Mattis, sostuvo que la orden de Trump es una “amenaza a la Constitución” y calificó las directivas como filo-nazis. La desobediencia de las Fuerzas Armadas, sumado al creciente distanciamiento de sectores de peso en el propio partido republicano, han agravado el aislamiento político del presidente, a cinco meses de las elecciones que definen su eventual reelección o un pase de mando que se efectivizaría en enero de 2021. Son 5/7 meses inusualmente cargados con la desastrosa gestión de la pandemia, una economía shockeada, decenas de millones de desocupados, una guerra económica abierta con China y un pueblo que ocupa las calles. Demasiado tiempo para tanta inestabilidad política.

La irrupción rebelde de los oprimidos tiene la virtud de desnudar la putrefacción de un régimen saturado de contradicciones en su interior. El reino de la libertad, la tierra de las oportunidades, la democracia modelo, nunca han quedado tan expuestos a los ojos del mundo como una farsa insostenible, y es gracias a la rebelión en curso. La lucha popular muestra la realidad nauseabunda del capitalismo más desarrollado.

En lo inmediato es probable que, así como estamos asistiendo a la fase ascendente de una rebe-

lión en el centro del imperialismo mundial, la falta de organización en torno a un programa y un proyecto de poder, muestren pronto los límites de esta sublevación. Sin embargo, las imágenes que están recorriendo el mundo recogen solidaridad en los pueblos más distantes y siembran inspiración para emprender con mayor confianza las batallas planteadas a los oprimidos y explotados del mundo entero. En América Latina, las luchas que estaban en desarrollo hasta hace unos meses, sólo se pausaron parcialmente. La agudización de la crisis en curso volverá a ponerlas como prioridad de los pueblos.

Transitamos épocas de grandes sufrimientos para los pueblos, y también de grandes convulsiones sociales, que abren la puerta para plantear salidas revolucionarias. En momentos en que el imperialismo deja en claro que no tiene para ofrecer más que la multiplicación de las injusticias, el rol de las organizaciones antimperialistas es clave para intervenir en el desarrollo de estas luchas y orientarlas en una perspectiva rebelde hacia la liberación nacional y el socialismo.

Leo Funes

***¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS
PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!***